LA “RECONCILIACIÓN” SEGÚN BUSTAMANTE

por Carlos Rivera Paz

El proceso de negociación política de la Mesa de Diálogo de la OEA ha recibido, bajo la denominación de “política nacional de reconciliación” la propuesta del gobierno para ampliar los alcances de las leyes de amnistía que en 1995 fueron promulgadas por el Congreso Constituyente Democrático. La gran novedad: incorporar a los términos de la amnistía los delitos cometidos en la lucha contra el narcotráfico y los actos de gobierno de estos años.

LA AMNISTÍA DE 1995

El 15 de junio de 1995 el CCD promulgó la Ley N° 26479 por medio de la cual se concedió amnistía general al personal militar, policial y civil denunciado que se encontraban comprendidos en delitos comunes y militares cometidos en la lucha contra el terrorismo, entre mayo de 1980 y la fecha de vigencia de dicha ley. En términos exactos esta ley establecía lo siguiente: *“Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares, en los fueros común o privativo militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente ley”*.

Pero también esta ley señaló que *“está excluido de la presente ley el personal militar, policial o civil que se encuentra denunciado, investigado, encausado o condenado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo y traición a la patria regulado por la ley 25659”*.

Si bien en muchos países de América Latina se han promulgado leyes de amnistía, no cabe duda que las normas distadas por el CCD superaron ampliamente los alcances de aquellas. A ello se debe agregar, necesariamente, el sometimiento e intervención del Poder Judicial y Ministerio Público, hecho que se ha constituido en un factor político determinante para evitar cualquier cuestionamiento a dichas normas.

LA NUEVA PROPUESTA

El 22 de octubre los Ministros de Defensa y del Interior publicaron un desafiante comunicado en el que señalan la posición política de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En este documento se declara que las leyes de amnistía (26479 y 26492) promulgadas en 1995 “...resultan insuficientes para garantizar que sus efectivos no sean víctimas de represalias que pretenden desatar algunas instituciones resentidas por el resultado obtenido en la lucha anti subversiva..”

Agrega el pronunciamiento que los “..excesos, no por aislados, menos censurables, producidos en los últimos años, han sido objeto de las sanciones de ley..” (Al respecto cabe preguntarse ¿qué hechos y quiénes han sido sancionados?)

El mismo día que apareció publicado este documento el ministro de justicia, hizo de conocimiento de los integrantes de la Mesa de Diálogo la propuesta de amnistía absoluta y total para militares, policías y civiles.

El gobierno ha propuesto lo siguiente:

- a) El perfeccionamiento, actualización y ubicación a nivel constitucional de las leyes 26479 y 26492, efectuadas las modificaciones que ambas partes concuerden.
- b) La extensión de los beneficios de las leyes a que se refiere el párrafo anterior a los casos de delitos cometidos en el contexto de la lucha emprendida contra el narcotráfico.
- c) La validación de los actos de gobierno y decisiones administrativas producidas en ocasión o como consecuencia de las decisiones adoptadas desde el 5 de abril de 1992 hasta la fecha de la vigencia del instrumento jurídico correspondiente. Ello debe incluir la exención de responsabilidades civiles, penales o administrativas de los funcionarios públicos pasibles de imputaciones al respecto. Y debe excluir la comisión de delitos comunes o vinculados a la corrupción o, de cualquier otra manera, incluidos en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal.

LA “ACTUALIZACIÓN” DE LA AMNISTÍA.

La propuesta busca extender el alcance de los beneficios de las leyes de amnistía de 1995 hasta el presente. La pretendida “actualización” no es otra cosa que beneficiar con la amnistía a aquellos militares, policías y civiles que estén o hayan sido denunciados, investigados, procesados o condenados por delitos comunes y militares, tanto por el Poder Judicial como el fuero militar, por hechos derivados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde junio de 1995 hasta la fecha.

Se pretende así otorgar amnistía a quienes hayan cometido delitos comunes y delitos contra los derechos humanos en ese período.

Hay que considerar que, según el texto de la segunda ley de amnistía del 95, la 26492, esta amnistía debe ser otorgada inclusive a aquellos militares, policías y civiles que hasta la fecha no hayan sido denunciados o investigados.

IMPUNIDAD CON RANGO CONSTITUCIONAL

Se pretende otorgar rango constitucional a las normas de impunidad. Sobre este punto algunos ministros del fujimorismo han propuesto que debería incorporarse una disposición transitoria a la Constitución Política que garantice la impunidad a los militares, permitiendo consagrar un probable acuerdo político que garantice que en un próximo gobierno no se investigue ni denuncie a militares o policías violadores de derechos humanos.

Los términos de la propuesta son profundamente contradictorios, puesto que las leyes de amnistía resultan abiertamente inconstitucionales ya que afectan el artículo 1°, que consagra la defensa de la persona humana y el artículo 139°, 1, que consagra la efectiva tutela jurisdiccional.

IMPUNIDAD PARA CASOS DE NARCOTRÁFICO

Se pretende extender los beneficios de las leyes de amnistía a los casos de delitos cometidos “en el contexto” de la lucha contra el narcotráfico. Si seguimos el esquema de la primera ley de amnistía de 1995, debemos entender que se propone la amnistía de cualquier delito común y militar cometido en forma individual o en grupo en la lucha contra el narcotráfico, sin exclusiones por el tipo de delito cometido.

Así, mismo debemos entender que se propone que la ampliación de estos beneficios comprende necesariamente a aquellos delitos cometidos desde mayo de 1980 hasta junio de 1995 y desde junio de 1995 hasta el día de hoy.

Ello sobre la base de que si bien las leyes de amnistía otorgaron beneficios por hechos cometidos desde 1980 hasta junio de 1995, el texto de la propuesta gubernamental contiene un pedido de “actualización” de los alcances de la leyes de amnistía.

Sobre este tema es conveniente recordar que en la primera ley de amnistía de 1995 (Ley 26479) se estableció la expresa prohibición de que los beneficios de dicha ley se apliquen a quienes estaban denunciados o procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

VALIDACIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

Se propone la validación de los actos de gobierno y decisiones administrativas producidas desde el golpe de estado del 5 de abril de 1992. Esta proposición sale de los alcances de la llamada ley de amnistía e ingresa de lleno al terreno de las decisiones políticas que se tomaron desde el 5 de abril de 1992. Se pretende cubrir de legalidad todos los actos y decisiones del Presidente Fujimori y de sus funcionarios

que hayan sido ejecutados durante los tres gobiernos de aquel, desde el 5 de abril de 1992 hasta el iniciado el 28 de julio del 2000.

Con eso no se podrían cuestionar, por ejemplo, nombramientos indebidos, asignaciones presupuestales determinadas, resoluciones y decretos secretos, el propio proceso electoral y, quizás más importante, una inmensa cantidad de hechos cuestionables que hoy no conocemos.

EXENCIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Adjunta a la propuesta de convalidación de los actos de gobierno, se incluye la exención de las responsabilidades civiles, penales o administrativas de los funcionarios. Es decir, que junto a la pretendida legalización de actos de gobiernos se exige que aquellos funcionarios públicos, responsables de dichos actos de gobierno o administrativos ilegales -sea porque hayan transgredido derechos ciudadanos o atentado contra el orden jurídico y democrático de nuestro país- sean eximidos de sus responsabilidades, proponiéndose que los alcances de ello sean múltiples ya que no solo se refieren a la imposibilidad de que sean denunciados y juzgados penalmente, sino inclusive civil y administrativamente.

Si bien la propuesta excluye de estos beneficios la comisión de delitos comunes vinculados a la corrupción o algunos delitos contra administración pública – lo que no sintomáticamente no hacen cuando proponen la amnistía para delitos en el combate al narcotráfico- , nada garantiza que se imponga una interpretación amplia y genérica de la exención propuesta, más aun si sobre este punto no se alcanza un especificación sobre los hechos o actos concretos que resultaría eximidos .

Bajo estos términos, la propuesta del gobierno es inaceptable no sólo porque es inconstitucional, porque impide la investigación adecuada y la sanción a quienes hayan perpetrado violaciones de los derechos humanos, socava los empeños por establecer el respeto de esos derechos y contribuye a garantizar la impunidad, sino tal como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, de junio del 2000, la amnistía constituye un obstáculo para consolidar la democracia.